Bogotá D.C, Diciembre 21 de agosto de 2025

Señores

JUZGADOS ADMINISTRATIVOS DEL CIRCUITO DE BOGOTÁ (REPARTO)

Ciudad

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA.

Accionante: JOSE RICARDO BARACALDO QUINTERO

Accionado: DIRECCION EJECUTIVA, SUBDIRECCION DE GESTION CONTRACTUAL, COMISION ESPECIAL DE CARRERA, COMITÉ EVALUADOR PROCESO SELECCIÓN FNG-NC-LP-005-2024 DE LA FISCALIA GENERAL DE LA NACION y la UNIVERSIDAD LIBRE DE COLOMBIA, OPERADOR QUE DESARROLLARÁ EL CONCURSO DE MÉRITOS FGN 2024.

JOSE RICARDO BARACALDO QUINTERO mayor e identificado con la cedula de actuando en nombre propio, acudo con el debido respeto ante su despacho para interponer ACCION DE TUTELA, en contra de la DIRECCION EJECUTIVA, SUBDIRECCION DE GESTION CONTRACTUAL, COMISION ESPECIAL DE CARRERA, COMITÉ EVALUADOR PROCESO SELECCIÓN FNG-NC-LP-005-2024 DE LA FISCALIA GENERAL DE LA NACION, órganos de dicha institución, representados legalmente por LIGIA STELLA RODRIGUEZ HERNANDEZ, RAUL JAVIER MANRIQUE VACCA, CARLOS HUMBERTO MORENO BERMUDEZ, respectivamente y la UNIVERSIDAD LIBRE DE COLOMBIA, OPERADOR QUE DESARROLLARÁ EL CONCURSO DE MÉRITOS FGN 2024; a fin de que se conceda la protección de los derechos constitucionales fundamentales de Debido Proceso por conexidad con el mismo, el de Transparencia, Responsabilidad, Planeación, prevalencia del interés general y legalidad, así mismo el fundamental derecho a la Igualdad, y demás conexos que su juicio técnico se encuentren vulnerados.

La presente solicitud de tutela tiene su origen en los siguientes hechos que configuran una **VIA DE HECHO ADMINISTRATIVA**, lesionando de manera grave derechos fundamentales anteriormente enunciados; dicha configuración de **VIA DE HECHO ADMINISTRATIVA**, tiene su génesis en actuaciones de los órganos o instancias accionadas mediante la presente acción constitucional, ya que cada una de ellas cumplió con un roll esencial para desembocar en la concreción del daño a los derechos fundamentales, al negarse a que el suscrito participará en el concurso de méritos.

HECHOS

1. Que la Fiscalía General de la Nación, apertura el PROCESO SELECCIÓN FNG-NC-LP-005-2024, el día 15 de octubre de 2024. Mediante resolución 8572 del 15 de octubre de 2024.
2. Que este proceso de selección tenía como objeto: “Desarrollar el Concurso de Méritos FGN 2024 para la provisión de algunas vacantes definitivas de la planta de personal de la Fiscalía General de la Nación (FGN), pertenecientes al sistema especial de carrera, en las modalidades de ascenso e ingreso, desde la etapa de inscripciones hasta la conformación y publicación de las listas de elegibles en firme.”
3. Con base en lo anterior, el suscrito se inscribió al cargo de FISCAL DELEGADO ANTE JUECES PENALES DEL CIRCUITO ESPECIALIZADOS, identificado con el código OPECE I-102-M-01-(419) modalidad Ingreso.
4. De conformidad con lo establecido en el artículo 20 del Acuerdo No. 001 de 2025, norma que regula el presente concurso de méritos, dentro de los dos (2) días siguientes a la publicación de los resultados preliminares de la etapa de Verificación de Requisitos Mínimos y Condiciones de Participación, los aspirantes podían presentar sus reclamaciones contra estos exclusivamente a 1 En adelante OPECE Vigilada Mineducación A través de la aplicación SIDCA3: <https://sidca3.unilibre.edu.co>. Estas deben ser atendidas por la UT Convocatoria FGN 2024 en virtud de la delegación efectuada a través del contrato suscrito con la Fiscalía General de la Nación. En este contexto, el día 02 de julio de 2025 se publicaron los resultados preliminares de la Etapa de Verificación del Cumplimiento de Requisitos Mínimos y Condiciones de Participación (VRMCP), por tanto, el plazo para presentar reclamaciones transcurrió entre el 03 y el 04 del mismo mes y año.
5. El Concurso de Méritos FGN 2024 se rige por las siguientes reglas establecidas en el Acuerdo de Convocatoria, el cual, se reitera, es de obligatorio cumplimiento: “ARTÍCULO 9. REQUISITOS DE PARTICIPACIÓN. Los siguientes son los requisitos generales que todos los aspirantes, independientemente de la modalidad, ascenso o ingreso, deben cumplir para participar en el presente concurso de méritos: (...) e. Cargar en la aplicación web SIDCA 3 toda la documentación que se pretenda hacer valer para la etapa de Verificación del Cumplimiento de Requisitos Mínimos y Condiciones de Participación y posteriormente en la prueba de Valoración de Antecedentes. Estos documentos podrán ser cargados hasta la fecha de cierre de inscripciones. ARTÍCULO 15. PROCEDIMIENTO PARA LAS INSCRIPCIONES. De conformidad con el artículo 31 del Decreto Ley 020 de 2014, con al menos diez (10) días hábiles de antelación, la UT Convocatoria

FGN 2024, a través de la aplicación web SIDCA 3 y en la página web de la Fiscalía General de la Nación www.fiscalia.gov.co, indicará las fechas de inicio y finalización de la etapa de Inscripciones para este Concurso, en las modalidades de ascenso e ingreso. (...) 5. CARGUE DE DOCUMENTOS. Los aspirantes deberán cargar en la aplicación web SIDCA 3, los documentos necesarios para la etapa de Verificación del Cumplimiento de Requisitos Mínimos y Condiciones de Participación, entre otros, los de identificación, nacionalidad (si Vigilada Mineducación Pág. 5 de 16 aplica), tarjeta profesional (cuando aplique), licencia de conducción para el caso de los empleos de conductor, documentos de soporte para los factores educación y experiencia, que serán tenidos en cuenta, y los pertinentes a condiciones de participación para la modalidad ascenso; así como aquellos adicionales para la asignación de puntaje en la prueba de Valoración de Antecedentes. Es plena responsabilidad del aspirante cargar adecuadamente y en el formato y peso que se solicite, los documentos correspondientes en la aplicación web SIDCA 3. Estos documentos podrán ser cargados en la aplicación web hasta la fecha prevista de cierre de inscripciones; posteriormente, no será posible el acceso para adicionar más documentos. ARTÍCULO 16. VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS MÍNIMOS. De conformidad con el artículo 32 del Decreto Ley 020 de 2014, la Verificación del Cumplimiento de Requisitos Mínimos no es una prueba, ni un instrumento de selección, sino una condición obligatoria de orden constitucional y legal, que de no cumplirse genera el retiro del aspirante en cualquier etapa del Concurso. La verificación del cumplimiento de los requisitos mínimos, exigidos en el Manual Específico de Funciones y Requisitos de los empleos que conforman la planta de personal de la Fiscalía General de la Nación (Versión 5 de mayo de 2024) y las Leyes 270 de 1996 y 2430 de 2024, desarrollados en la Oferta Pública de Empleos de Carrera Especial – OPECE, para cada uno de los empleos ofertados en este concurso de méritos, en las modalidades de ascenso y de ingreso, se realizará a todos los aspirantes inscritos, con base únicamente en la documentación que cargaron y registraron en la aplicación web SIDCA 3 hasta la fecha del cierre de la etapa de inscripciones. Este proceso de revisión documental tiene por objeto determinar si los aspirantes CUMPLEN o NO CUMPLEN con los requisitos mínimos y condiciones de participación exigidos para el desempeño del empleo que hayan seleccionado, con el fin de establecer si son ADMITIDOS o NO para continuar en el concurso de méritos”

6. Que el a ARTÍCULO 20. RECLAMACIONES. De conformidad con el artículo 48 del Decreto Ley 020 de 2014, dentro de los dos (2) días siguientes a la publicación de los resultados preliminares de Verificación del Cumplimiento de Requisitos Mínimos y Condiciones de Participación, los aspirantes podrán presentar reclamación exclusivamente a través de la aplicación web

SIDCA 3 enlace <https://sidca3.unilibre.edu.co>; estas serán atendidas antes de la aplicación de las pruebas escritas, por parte de la UT Convocatoria FGN 2024, en virtud de la delegación efectuada a través del contrato suscrito con la Fiscalía General de la Nación. Los documentos adicionales presentados por los aspirantes en la etapa de reclamaciones se consideran extemporáneos, por lo que en ningún caso serán tenidos en cuenta en este proceso de selección". (Subrayado y resaltado fuera de texto) Vigilada Mineducación Pág. 16 de 16 Por lo anterior, aquellos documentos que no se allegaron en debida forma hasta la fecha de cierre de inscripciones, la cual fue 30 de abril de 2025, no pueden ser tenidos en cuenta para la etapa de Verificación del Cumplimiento de los Requisitos Mínimos y Condiciones de Participación (VRMCP) del empleo al cual aspiró.

7. Que este delegado al observar que no fue admitido al concurso, pese a cumplir con los requisitos mínimos para su participación con sorpresa observó la documentación que se anexó y en tiempo, el 04 de julio de 2025, elevó la siguiente reclamación:

"(...)

Al observar los resultados de admisión fueron de sorpresa para mí, por la negativa a participar del mismo ya que cuando observe la descripción que digite para cada uno de los cargos que he obtenido a lo largo de mi carrera profesional de cara a la fecha de inicio y finalización es correcta, cumpliendo con creces la experiencia profesional. No obstante, me lleve la sorpresa que la documentación que se cargó en todos los cargos relacionados con la Fiscalía General de la Nación, es un certificado que solo acredita mi experiencia desde el 11-08-2017 hasta el 11-04-2023, fecha última de la certificación que fue expedida por la Subdirección Regional Orinoquia de la FGN, sin comprender porque ese documento soporta y figura en todas las demás cargos y fechas, al parecer el sistema no cargo el documento correcto para las demás experiencias, sin comprender si fue por los errores que estaba presentando la página por la congestión o no sé si por alguna falla técnica o humana.

*No obstante, quiero justificar por qué si se debe valorar el documento que no figura para la demás experiencia, mencionando desde ya que **no pretendo anexar documentación nueva** porque no es con fecha de certificación de días recientes la expedición del documento, es de la fecha en la que fueron cargados los documentos y en el momento en que fueron digitados la descripción y la fecha de inicio y finalización de cada cargo con la Fiscalía.*

Veamos:

Con el certificado expedido el 11-04-2023, se acredita la experiencia profesional para los cargos de asistente de fiscal I y II desde el 11-08-2017 hasta el 25-10-2022, también se justifica la experiencia desde que inicie como Fiscal, desde el 14-10-2021 hasta la fecha de la certificación que es del 11-04-2023. Sin embargo, no comprendo porque ese documento figura en todos los anexos que justifican las fechas posteriores a la del 11-04-2023. Véase que, en la descripción del cargo de fiscal del circuito y de mi cargo actual de fiscal local, figuran las fechas de inicio y finalización, del primero desde el 08-02-2024 hasta el 17-06-

2024 y del segundo desde el 14-10-2021 hasta la fecha de expedición del documento del 16-04-2025 para el cargo de fiscal local, que corresponden a la **realidad (esa información no se puede modificar)** y que para saber con exactitud esas fechas tenía que tener en mi poder si o si el certificado para esa fecha. No obstante, no sé si por el peso o por error del sistema se cargó el certificado del 14-04-2023 para todos los cargos, sin embargo, quiero indicar que para justificar esta petición no estoy anexando, un certificado reciente, como lo mencione con anterioridad, estoy adjuntando el certificado de esa fecha, del **16-04-2025**, de hecho adjunto las observaciones del documento del pdf para que analicen que el **documento fue descargado en la misma fecha de la expedición del documento**, descargado desde mi oficina porque para acceder a la intranet y al KACTUS solo es posible desde la oficina. **Al observar ese documento, podrán analizar que las fechas que digite en el momento que relacionar los cargos corresponden a la realidad y que no estoy anexando un certificado reciente, es de esa fecha, sin entender la razón del porque no se adjunto de forma correcta.** Les ruego que lo vean bajo el principio de la buena fe y que no estoy discutiendo o no por errores que ustedes analizaron de mi experiencia, fue por error en el cargue de ese documento y que insisto no estoy anexando un documento reciente, ustedes pueden contrastar la fecha de expedición del certificado y las fechas que yo puse de inicio y de expedición de la experiencia como fiscal local y fue la del 16-04-2025, no figura otra fecha, es esa.

No es justo que esto suceda, porque realmente el documento que descargue es del 16 de abril de 2025 y así se observa de la fecha de expedición que puse en mi experiencia como fiscal local que es de fecha 16 de abril de 2025, es decir, estoy mencionando que cuando digite la experiencia de fiscal delegado ante jueces municipales, digite, fecha de inicio 14 de octubre de 2021 y como fecha de expedición del documento la del 16 de abril de 2025, es claro que no puse fecha de finalización porque es mi cargo actual. Les suplico no lo vean como un cargue de documento nuevo porque no es así, es un certificado para esa fecha. Agradecido enormemente y con la gran expectativa que la persona que revise esto va más allá de lo formal y que realmente analice que el documento es de esa fecha y se me permita concursar ya que objetivamente cuento con la experiencia profesional y que el documento corresponde a las fechas que yo adjunte en mi experiencia en el SIDCA 3. No estoy anexando documento reciente, fue de esa fecha.

CONSIDERACIONES LEGALES Y JURISPRUDENCIALES

Quisiera iniciar esta sucinta exposición, con la **SENTENCIA DE UNIFICACION 213 DE 2021**¹:

“Derecho al debido proceso administrativo. Reiteración de jurisprudencia

54. *Reconocimiento constitucional del debido proceso.* El artículo 29 de la Constitución Política prevé que el debido proceso “*se aplicará a toda clase de actuaciones judiciales y administrativas*”. En relación con las actuaciones judiciales, el debido proceso “*constituye un límite a la actividad judicial, por virtud del cual la autonomía conferida por la Constitución Política a los jueces no puede convertirse en un pretexto para que estos incurran en arbitrariedades*”^[148]. En relación con las actuaciones administrativas, el debido proceso “*limita los poderes del Estado y establece las garantías de protección a los derechos de los administrados, de modo que ninguna de las actuaciones de las autoridades públicas dependa de su propio*

arbitrio, sino que se encuentren sujetas siempre a los procedimientos señalados en la ley^[149]. Además, el debido proceso ha sido reconocido por distintos instrumentos internacionales como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (art. 14.1), la Declaración Universal de Derechos Humanos (arts. 8 y 10), la Convención Americana sobre Derechos Humanos (arts. 8 y 25), la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre (art. 18) y el Convenio Europeo de Derechos Humanos (art. 6).

55. *Contenido y alcance del debido proceso administrativo.* La Corte Constitucional ha identificado tres finalidades del debido proceso administrativo, a saber: “(i) *asegurar el ordenado funcionamiento de la administración, (ii) garantizar la validez de sus propias actuaciones y (iii) resguardar el derecho a la seguridad jurídica y a la defensa de los administrados*”^[150]. Estas finalidades se satisfacen a la luz de cuatro componentes del debido proceso administrativo^[151]: (i) el acceso a la justicia en libertad e igualdad de condiciones, (ii) el ejercicio de la legítima defensa, (iii) la determinación de trámites y plazos razonables y, por último, (iv) la imparcialidad en el ejercicio de la función pública administrativa. La Corte ha reconocido que, mediante estos componentes, “*se garantiza el correcto y adecuado ejercicio de la función pública administrativa, (...) con el fin de evitar posibles actuaciones abusivas o arbitrarias por parte de la administración a través de la expedición de actos administrativos que resulten lesivos de derechos o contrarios a los principios del Estado de Derecho*”^[152].

56. *Plazo razonable.* La Constitución Política y la Convención Americana sobre Derechos Humanos prevén el deber estatal de garantizar el plazo razonable, “*con el fin de evitar dilaciones injustificadas que configuren la vulneración de los derechos fundamentales*”^[153]. De un lado, el artículo 29 de la Constitución Política dispone que toda persona tiene derecho “*a un debido proceso público sin dilaciones injustificadas*”. De otro lado, los artículos 8 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos prevén que “*toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable*”, mediante “*un recurso sencillo y rápido o a cualquier otro recurso efectivo ante los jueces o tribunales competentes*”. Por lo anterior, la Corte Constitucional ha resaltado que el derecho a que la actuación se surta sin dilaciones injustificadas forma “*parte de las garantías del debido proceso administrativo*”^[154], que puede desconocerse “*por la ausencia de celeridad en una actuación*”^[155].

Así mismo, la línea jurisprudencial trazada en la Sentencia SU772/14, respecto de la procedencia de la **Acción de tutela contra actos administrativos que configuran vías de hecho:**

“DEBIDO PROCESO ADMINISTRATIVO-Procedencia de la acción de tutela contra actos administrativos que constituyen vías de hecho

El principio de legalidad es una de las manifestaciones de lo que la Carta Política instituyó como debido proceso el cual es definido por la jurisprudencia de esta Corporación como “el conjunto de garantías previstas en el ordenamiento jurídico, a través de las cuales se busca la protección del individuo incurso en una actuación judicial o administrativa, para que durante su trámite se respeten sus derechos y se logre la aplicación correcta de la justicia”. Este derecho fundamental es “aplicable a toda clase de actuaciones judiciales y administrativas”, y puede ser protegido cuando se encuentre amenazado o sea vulnerado por parte de una autoridad pública o de un particular, a través de la acción de tutela.”

“ACCION DE TUTELA FRENTE A CONTROVERSIAS CONTRACTUALES-Improcedencia cuando carecen de relevancia iusfundamental

Cuando la controversia verse sobre contratos estatales, se debe hacer uso de los otros mecanismos de defensa judicial creados por la ley, como la acción de controversias contractuales, la acción de responsabilidad contractual del Estado, y dadas las particularidades del caso, la acción de nulidad y restablecimiento del derecho. Sin embargo, la sola existencia de otros medios de control no se traduce en que a ellos se deba acudir, pues en muchos casos no son idóneos para el amparo de los derechos de los interesados. Para determinar la idoneidad de éstos se deben evaluar aspectos como: i) que el tiempo de trámite no sea desproporcionado frente a las consecuencias de la decisión administrativa, lo cual ocurriría, por ejemplo, cuando a un contratista se le ha declarado la caducidad de su contrato, y al someterlo a la espera de la resolución de las controversias contractuales, se le cercena la posibilidad de presentarse a concursar para la adjudicación de otros contratos; ii) que las exigencias procesales no sean excesivas, dada la situación en que se encuentra el afectado, lo cual ocurre, por ejemplo, cuando se imponen tasas previas excesivas para demandar ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo; iii) que el remedio que puede ordenar el juez no sea adecuado para satisfacer el derecho de que se trate, por ejemplo, cuando el juez no pueda ordenar medidas de restablecimiento del derecho; y iv) cuando el otro mecanismo no permita atender las particularidades de los sujetos, como cuando la resolución del problema en el contencioso administrativo dependa estrictamente de criterios legales ajenos a las condiciones particulares y especiales de vulnerabilidad en que se encuentre una persona. Además, es de recordarse que la procedencia de la acción de tutela en estos eventos exige que la controversia contractual comprenda la posible vulneración o amenaza de un derecho fundamental. En otras palabras, si no está involucrado un

derecho fundamental, no compete al juez de tutela analizar la inminencia de un perjuicio irremediable para el accionante en el marco de un proceso contractual, o la idoneidad de los medios ordinarios de defensa.” (subrayado-negrita fuera del texto original).

La sentencia T-299 de 2024ⁱⁱ, delimita nuevamente ese campo de acción de la acción de tutela, su procedencia:

“Ahora, excepcionalmente, la Corte ha reconocido que la acción de tutela es procedente, primero, como mecanismo *definitivo*, cuando se constata que el medio de control preferente no es idóneo ni efectivo para garantizar la protección oportuna e inmediata de los derechos fundamentales vulnerados.^[76] **Al respecto, ha precisado que la idoneidad quiere decir que el medio judicial ordinario otorga un remedio integral para la protección de los derechos fundamentales vulnerados, y la eficacia, que es lo suficientemente expedito para atender la situación.**^[77]

46. Segundo, como mecanismo *transitorio*, para evitar la ocurrencia de un perjuicio irremediable. Para que se configure un perjuicio irremediable, la Corte ha sostenido que se debe establecer: (i) la inminencia del perjuicio, es decir, que el daño “*está por suceder en un tiempo cercano*”; (ii) la urgencia de las medidas para evitar la afectación de los derechos fundamentales; (iii) la gravedad del perjuicio; y (iv) el carácter impostergable de las órdenes por proferir.^[79]

47. Por último, ha sostenido que la acción de tutela puede resultar procedente, cuando se vulneren principios de orden constitucional como el debido proceso, que por mandato expreso del artículo 29 de la Constitución,^[80] se aplica a toda clase de actuaciones administrativas o judiciales.^[81]”

En este caso, que involucra mis derechos fundamentales al debido proceso, **no cuento con otro mecanismo inmediato y eficaz de protección a mis derechos fundamentales, entre ellos y como principal al debido proceso.** Esta mas que probada la configuración de **VIAS DE HECHO** en sede administrativa, que hacen imposible que como administrado cuestione, recurra y participe en condiciones de igualdad y transparencia en un proceso administrativo, como lo es el concurso de méritos que se va a desarrollar, con el menoscabo de las reglas y principios que consagran la garantía fundamental al debido proceso administrativo.

Lastimosamente, se debe concurrir a utilizar **mecanismos excepcionales ante una situación excepcional**, ya que los demás medios de control judicial frente a estas vías de hecho, probadas ya, tardarían años por decir menos en surtir efectos, y cuando produzcan medidas de protección, el perjuicio estaría consumado, no solo sobre mis derechos fundamentales, sino sobre el patrimonio público, ya que el

contratista utilizaría recursos públicos asignados al contrato que se adjudicó, y este no podría llegar a su culminación. Empobreciendo aun mas las ya famélicas finanzas públicas, cuyos recursos son limitados, muy a pesar de lo que el público en general piensa.

Al respecto, la H. Corte Constitucional en sentencia SU-067-2022, dispuso que:

“ACCION DE TUTELA EN CONCURSO DE MERITOS-Procedencia excepcional

Los actos administrativos que se dicten en el curso de estas actuaciones administrativas podrán ser demandados por esta vía cuando se presente alguno de los siguientes supuestos: i) inexistencia de un mecanismo judicial que permita demandar la protección del derecho fundamental infringido, ii) configuración de un perjuicio irremediable y iii) planteamiento de un problema constitucional que desborde el marco de competencias del juez administrativo.

ACCION DE TUTELA CONTRA ACTOS ADMINISTRATIVOS DE TRAMITE EN CONCURSO DE MERITOS-Procedencia excepcional

- i) que la actuación administrativa de la cual hace parte el acto no haya concluido; ii) que el acto acusado defina una situación especial y sustancial que se proyecte en la decisión final; y iii) que ocasione la vulneración o amenaza real de un derecho constitucional fundamental.”*

SOLICITUD DE MEDIDA CAUTELAR PROVISIONAL

SOLICITUD DE MEDIDA PROVISIONAL: El Decreto 2591 de 1.991, por el cual se reglamenta la acción de tutela, establece que el Juez Constitucional, cuando lo considere necesario y urgente para proteger un derecho amenazado o vulnerado “suspenderá la aplicación del acto concreto que lo amenace o vulnere”. En efecto, el artículo 7° de esta normatividad señala: **“ARTICULO 7o. MEDIDAS PROVISIONALES PARA PROTEGER UN DERECHO.** Desde la presentación de la solicitud, cuando el juez expresamente lo considere necesario y urgente para proteger el derecho, suspenderá la aplicación del acto concreto que lo amenace o vulnere. Sin embargo, a petición de parte o de oficio, se podrá disponer la ejecución o la continuidad de la ejecución, para evitar perjuicios ciertos e inminentes al interés público. En todo caso el juez podrá ordenar lo que considere procedente para proteger los derechos y no hacer ilusorio el efecto de un eventual fallo a favor del solicitante. La suspensión de la aplicación se notificará inmediatamente a aquél contra quien se hubiere hecho la solicitud por el medio más expedito posible. El juez también podrá, de oficio o a petición de parte, dictar cualquier medida de conservación o seguridad encaminada a proteger el derecho o a evitar que se produzcan otros daños como consecuencia de los hechos realizados, todo de

conformidad con las circunstancias del caso. El juez podrá, de oficio o a petición de parte, por resolución debidamente fundada, hacer cesar en cualquier momento la autorización de ejecución o las otras medidas cautelares que hubiere dictado”.

La medida provisional de suspensión de un acto concreto que presuntamente amenaza o vulnera un derecho fundamental, pretende evitar que la amenaza al derecho se convierta en violación o que la violación del derecho produzca un daño más gravoso que haga que el fallo de tutela carezca de eficacia en caso de ser amparable el derecho. Como su nombre lo indica, la medida es provisional mientras se emite el fallo de tutela, lo cual significa que la medida es independiente de la decisión final. El Juez de Tutela podrá adoptar la medida provisional que considere pertinente para proteger el derecho, cuando expresamente lo considere necesario y urgente. Esta es una decisión discrecional que debe ser “razonada, sopesada y proporcionada a la situación planteada”.

A su vez, la Corte Constitucional en Auto 259/21, resalta que: "La procedencia de la adopción de medidas provisionales está supeditada al cumplimiento de los siguientes presupuestos: (i) Que la solicitud de protección constitucional contenida en la acción de tutela tenga vocación aparente de viabilidad por estar respaldada en fundamentos: (a) fácticos posibles y (b) jurídicos razonables, es decir, que exista la apariencia de un buen derecho (*fumus boni iuris*); (ii) Que exista un riesgo probable de que la protección del derecho invocado o la salvaguarda del interés público pueda verse afectado considerablemente por el tiempo transcurrido durante el trámite de revisión, esto es, que haya un peligro en la demora (*periculum in mora*) y (iii) Que la medida provisional no genere un daño desproporcionado a quien afecta directamente." Por último, la Corte Constitucional en sentencia SU – 913 de 2009, exterioriza que: "(...) en materia de concursos de méritos para la provisión de cargos de carrera se ha comprobado que no se encuentra solución efectiva ni oportuna acudiendo a un proceso ordinario o contencioso, en la medida que su trámite llevaría a extender en el tiempo de manera injustificada la vulneración de derechos fundamentales que requieren de protección inmediata. Esta Corte ha expresado, que para excluir a la tutela en estos casos, el medio judicial debe ser eficaz y conducente, pues se trata nada menos que de la defensa y realización de derechos fundamentales, ya que no tendría objeto alguno enervar el mecanismo de tutela para sustituirlo por un instrumento previsto en el ordenamiento legal que no garantice la supremacía de la Constitución en el caso particular." (Negrilla fuera del texto original)

PETICIÓN

PRIMERO: Se conceda la **medida provisional**, y se ordene a DIRECCION EJECUTIVA, SUBDIRECCION DE GESTION CONTRACTUAL, COMISION ESPECIAL DE CARRERA, COMITÉ EVALUADOR PROCESO SELECCIÓN FNG-NC-LP-005-2024 DE LA FISCALIA GENERAL DE LA NACION, órganos de dicha

institución, representados legalmente por LIGIA STELLA RODRIGUEZ HERNANDEZ, RAUL JAVIER MANRIQUE VACCA, CARLOS HUMBERTO MORENO BERMUDEZ, respectivamente, UNIVERSIDAD LIBRE DE COLOMBIA, OPERADOR QUE DESARROLLARÁ EL CONCURSO DE MÉRITOS FGN 2024. **suspender de manera inmediata la continuación y realización del proceso de PROCESO SELECCIÓN FNG-NC-LP-005-2024 EN LA ETAPA EN QUE SE ENCUENTRE** así como cualquier otra etapa del proceso que vulnere mis derechos fundamentales, a causa de las vías de hecho administrativas en que se fundó dicho proceso.

SEGUNDO: Con fundamento en lo anteriormente expuesto le solicito señor(a) juez que se tutelen mis derechos fundamentales invocados como amenazados, violados y vulnerados como lo es EL DERECHO A LA IGUALDAD, DERECHO AL DEBIDO PROCESO, DERECHO AL TRABAJO, EFICACIA, IMPARCIALIDAD, TRANSPARENCIA, CELERIDAD, MÉRITO Y OPORTUNIDAD PARA EL ACCESO COMO SERVIDOR PÚBLICO, **y se ordene la suspensión de toda la actuación administrativa compleja** que desembocó en la adjudicación del PROCESO SELECCIÓN FNG-NC-LP-005-2024 DE LA FISCALIA GENERAL DE LA NACION INCLUYENDO LA FIRMA, **como medida transitoria, mientras se acude a la jurisdicción de lo contencioso administrativo en ejercicio de un medio de control ordinario contra los actos administrativos producidos en contravía de mis derechos fundamentales, y esta define la situación jurídica de dicho proceso, producido de manera irregular.** en especial al debido proceso, legalidad, publicidad y transparencia. No sobra señalar, que ha sido la misma Corte Constitucional que ha señalado que existiendo los medios de defensa judiciales, la acción de tutela se utiliza como mecanismo transitorio para evitar que siga consumando el perjuicio irremediable, mientras el juez ordinario decide el fondo del caso de forma definitiva.

TERCERO: Sírvase señor juez ORDENAR que el suscrito aspirante sea incluido en la lista de admitido y en su lugar pueda continuar en el proceso de selección de la mencionada convocatoria.

CUARTO: Se tomen las determinaciones que el(la) señor Juez(a) considere conducentes para la efectiva protección de los derechos vulnerados.

PRUEBAS

- 1. TRES FOLIOS QUE CONTIENEN LA DOCUMENTACIÓN QUE SOPORTA LA RECLAMACIÓN POR LA NO ADMISIÓN AL CONCURSOS.**
- 2. DIECISEIS FOLIOS QUE CONTIENE RESPUESTA A LA RECLAMACIÓN POR LA ADMISIÓN AL CONCURSO DE MERITOS.**
- 3. Un FOLIO QUE CONTIENE PANTALLAZO DE LA RECLAMACIÓN REALIZADA.**

COMPETENCIA

En el presente caso la competencia recae en los Juzgados del Circuito del Departamento de Bogotá por dirigirse la tutela contra autoridad del orden nacional y el lugar de mi residencia es en la ciudad de Bogotá.

JURAMENTO

Bajo la gravedad del juramento afirmo que no he presentado otra acción de tutela por los mismos hechos y derechos a que se refiere la presente demanda.

NOTIFICACIONES

ACCIONADA: COMISION ESPECIAL DE CARRERA DE LA FISCALIA GENERAL DE LA NACION representada legalmente por CARLOS HUMBERTO MORENO BERMUDEZ, Subdirector Nacional de Apoyo a la comisión Especial de Carrera de la Fiscalía General de la Nación. DIRECCION EJECUTIVA, SUBDIRECCION DE GESTION CONTRACTUAL, COMITÉ EVALUADOR PROCESO SELECCIÓN FNG-NC-LP-005-2024; todos DE LA FISCALIA GENERAL DE LA NACION Cra. 13 No. 73-50 piso 2 edificio Villegas, Bogotá D.C. teléfono (601) 5803614 Ext. 33411. En los correos electrónicos: andrea.verdugo@fiscalia.gov.co humberto.moreno@fiscalia.gov.co carrera.especialfgn@fiscalia.gov.co juridicanotificacionestutela@fiscalia.gov.co y Universidad Libre al correo: notificacionesjudiciales@mineducacion.gov.co y infosidca3@unilibre.edu.co

Atentamente,

JOSE RICARDO BARACALDO QUITERO